Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, el **tres de abril de dos mil veinticuatro**.

**VISTO** el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión **00117/INFOEM/IP/RR/2023**, promovido por **XXXXX XXXXXXXXX** queen lo sucesivo se denominará **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de Atenco,** que en lo sucesivo se denominará **EL SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución con base en lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

**I. De la Solicitud de Información**

El **doce de diciembre de dos mil veintidós[[1]](#footnote-1)**, **EL RECURRENTE** presentó a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, que en lo subsecuente se denominará **EL SAIMEX** ante **EL SUJETO OBLIGADO**, la solicitud de Acceso a la Información pública, a la que se le asignó el número de expediente **00441/ATENCO/IP/2022,** mediante la cual requirió lo siguiente:

*“Por este medio se solicita de la C. MARÍA VIOLETA LOPEZ ESPEJEL actual Contralor Municipal en la administración 2022 – 2024 del Ayuntamiento y DIF municipal de Atenco lo siguiente: 1. Nombramiento de la administración 2019-2021 y 2022-2024. 2. Acta de cabildo firmada donde conste la designación de la persona en cuestión como Contralor en la administración 2022-2024. 3. Acta de cabildo firmada donde conste la designación y destitución de la persona en cuestión como Contralor en la administración 2019-2021. 4. Documento donde conste los motivos de la destitución, despido o cualquier otro motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral. 5. Curriculum Vitae. 6. Certificado de competencia laboral vigente para desempeñar el cargo como Contralor. 7. Jornada laboral 8. Listas de asistencia del primero de enero 2022 hasta la fecha de la presente solicitud. 9. Recibos de nomina como Contralor de la administración 2019-2021 asi como de la actual 2022-2024. 10. Conocer si ha desempeñado algún otro cargo como servidora pública dentro del municipio de Atenco en el año 2019, 2020, 2021 y 2022. Si es el caso, se solicita se informe el cargo, área de adscripción y documento que lo acredite. 11. Conocer en que estado se encuentra el juicio laboral SAE/1199/2019 u otro presentado por la hoy servidora pública en contra del H. Ayuntamiento de Atenco, si ya se ha emitido resolución de laudo, y en el caso de que sea afirmativo, cuanto fue el monto otorgado a la servidora pública y el documento que acredite la entrega de los recursos. 12. Se informe si la ciudadana tiene procedimientos internos vigentes y concluidos, si es el caso, se informe los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA:** vía **SAIMEX.**

**II. Turno de requerimiento del Sujeto Obligado**

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el **catorce de diciembre de dos mil veintidós,** la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO**, turnó el requerimiento de información a los servidores públicos habilitados que estimó pertinente, a fin de colmar la Solicitud de Acceso a la Información.

**III. Respuesta del Sujeto Obligado**

De las constancias que integran el expediente electrónico del **SAIMEX** se advierte que **EL SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en los términos que a continuación se citan:

*“…En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*“2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México” UNIDAD DE TRANSPARENCIA Oficio No.: PMA/UT/INT/2022/00448 Solicitud de Información: 00441/ATENCO/IP/2022 Atenco, Estado de México, 20 de diciembre de 2022. C. SOLICITANTE DE INFORMACIÓN P R E S E N T E. De conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción XLIV, 4, 12, 16, 23 fracción IV, 24 fracción XI y último párrafo, 50, 51 y 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; me permito comentar a usted lo siguiente: En atención a la solicitud de información registrada con el folio número 00441/ATENCO/IP/2022, sírvase encontrar en archivos adjuntos, copia digitalizada del oficio emitido por el Servidor Público Habilitado, en el cual se detalla lo referente a su solicitud de acceso a la información. Se hace de su conocimiento el término de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente del que haya surtido efectos la notificación del presente oficio, para interponer el recurso de revisión que se señala en los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. A T E N T A M E N T E LIC. EN D. RAQUEL GAYOSSO ESPINOSA. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE ATENCO.*

*ATENTAMENTE*

*Lic. en D. Raquel Gayosso Espinosa” (sic)*

De igual modo, **EL SUJETO OBLIGADO** acompañó a su respuesta los archivos electrónicos que a continuación se describen:

* ***Sol Info. 441.pdf,*** el cual contiene el número de oficio PMA/UT/SOL/2022/00448 del veinte de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual la Titular de la Unidad de Transparencia, refiere adjuntar oficio emitido por el servidor público habilitado, en el que se detalla lo referente a la solicitud.
* ***Resp. Sol. 441 Contra. Prueba daño.pdf,*** el cual contiene el oficio número CIM/AI/OF.189/2022 del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual la Autoridad Investigadora adscrita a la Contraloría Interna, respecto a la solicitud identificada con el numeral 12, relacionada con procedimientos internos vigentes y concluidos; refirió que corresponde a información clasificada con el carácter de reservada; por lo que solicita se someta a consideración del Comité de Transparencia la reserva de la información, adjuntando para ello la prueba de daño.
* ***Resp. Sol. 441 Secretaria.pdf,*** el cual contiene el oficio número HHA/SA/OF/16/12/2022/958 del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual la Secretaria del Ayuntamiento, adjunta el Acta de la Sesión solemne de instalación Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha uno de enero de dos mil veintiuno; así como, del Acta de Sesión solemne Primera Sesión Ordinara de Cabildo del uno de enero de dos mil diecinueve y Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo del nueve de agosto de dos mil diecinueve.
* ***Resp. Sol. 441 Juridico.pdf,*** el cual contiene el oficio número PMA/UJA/0384/2022 del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual la Titular de la Unidad Jurídica, respecto de la solicitud identificada con el numeral 11, relacionada con el estado procesal que se encuentra el juicio laboral precisado en la solicitud; señala que se encuentra en la etapa inicial, fijándose día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, aclarando que no se ha emitido laudo correspondiente y por tanto tampoco se ha pagado cantidad alguna al trabajador.
* ***Resp. Sol. 441 RH.pdf,*** el cual contiene el oficio número PMA/JRH/901/2022 del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por medio del cual la Jefa de Recursos Humanos, refiere entregar nombramientos de las administraciones 2019-2021 y 2022-2024, Acta de la Séptima Sesión Extraordinaria de Cabildo de la administración 2019-2021, currículum vitae, certificado de competencia laboral, listas de asistencia, recibos de nómina administración 2019-2021 (sólo los que se encontraron en el SAIMEX) y recibos de nómina de la administración 2022-2024. Asimismo, informa jornada laboral de la Contralora Interna Municipal.
* ***Acta 82.pdf,*** el cual contiene el Acta Octogésima Segunda Extraordinaria del Comité de Transparencia, por medio del cual se aprobó por unanimidad la propuesta de clasificación como reservada la solicitud realizada por el particular identificada con el numeral 12, relacionada con los procedimientos internos.

**IV. Del Recurso de Revisión**

Inconforme con la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, el nueve de enero de dos mil veintitrés[[2]](#footnote-2), **EL RECURRENTE** interpuso el Recurso de Revisión objeto del presente estudio, el cual fue registrado en **EL SAIMEX** al día siguiente hábil; es decir, el nueve de enero de dos mil veintitrésy se le asignó el número de expediente **00117/INFOEM/IP/RR/2023,** en el que señaló como:

**Acto impugnado:**

*“INFORMACIÓN OMISA, CLASIFICACIÓN EXCESIVA E INCOMPLETA” (sic)*

**Así como, razones o motivos de inconformidad:**

*“FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL REQUERIMIENTO NÚMERO 4. "Documento donde conste los motivos de la destitución, despido o cualquier otro motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral." CLASIFICACIÓN INCOMPLETA DEL PUNTO NÙMERO 5. "Curriculum*

*Vitae." CLASIFICACIÓN EXCESIVA Y POCO CLARA DEL PUNTO 12. "Se informe si la ciudadana tiene procedimientos internos vigentes y concluidos, si es el caso, se informe los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas."” (sic)*

**V. Del turno del Recurso de Revisión**

El Recurso de que se trata se envió electrónicamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios el **seis de enero de dos mil veintitrés**; por lo que, con fundamento en el artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se turnó, a través del **SAIMEX**, a la comisionada **Sharon Cristina Morales Martínez**, a efecto de decretar su admisión o desechamiento.

**a) Admisión del Recurso de Revisión**

De las constancias del expediente electrónico del **SAIMEX**, se advierte que el **diez de enero de dos mil veintitrés**, se acordó la admisión a trámite del Recurso de Revisión que nos ocupa; así como la integración del expediente respectivo, mismo que se puso a disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles **EL RECURRENTE** manifestara lo que a su derecho conviniera, a efecto de presentar pruebas o alegatos y, en su caso, **EL SUJETO OBLIGADO** rindiera su correspondiente Informe Justificado; lo anterior , conforme a lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Informe Justificado**

Conforme a las constancias que obran en el expediente electrónico del **SAIMEX**, del Recurso de Revisión materia del presente estudio, se desprende que atento a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dentro del término legalmente concedido al **RECURRENTE**, éste no realizó manifestación alguna, ni presentó pruebas o alegatos, de igual forma **EL SUJETO OBLIGADO** no rindió su Informe Justificado.

 **c) De la ampliación**

El **veintidós de febrero de dos mil veintitrés**, se notificó el acuerdo de ampliación de plazo para resolver el presente Recurso de Revisión, previsto en el artículo 181, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de Recursos de Revisión recibidos dentro del primer semestre del año dos mil veintidós, que, en comparación con los recibidos en el año dos mil veintiuno dentro del mismo periodo, se ha incrementado aproximadamente un 400%, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución a los Recursos de Revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**d) Cierre de Instrucción**

Por lo que, una vez analizado el estado procesal que guarda el expediente, el **dos de abril de dos mil veinticuatro**, la **Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez** acordó el cierre de instrucción, así como la remisión del mismo, a efecto de ser resuelto, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 fracciones VI y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** **Competencia**.

Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente Recurso de Revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2 fracción II, 13, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO. Interés.**

El Recurso de Revisión fue interpuesto por parte legítima, en atención a que se presentó por **EL RECURRENTE,** quien es la misma persona que formuló la solicitud de Acceso a la Información pública al **SUJETO OBLIGADO,** pues para ello, es necesario que el particular ingrese al **SAIMEX** mediante la utilización de su clave de usuario y contraseña.

**TERCERO. Oportunidad.**

El Recurso de Revisión se interpuso dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que **EL RECURRENTE** tuvo conocimiento de la respuesta impugnada, tal y como lo prevé el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece:

***“Artículo 178.*** *El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta.*

*A falta de respuesta del sujeto obligado, dentro de los plazos establecidos en esta Ley, a una solicitud de Acceso a la Información pública, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento, acompañado con el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud.*

*En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al Instituto a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.****”***

En esa tesitura, atendiendo a que **EL SUJETO OBLIGADO** notificó la respuesta a la solicitud de información pública el día **veinte de diciembre de dos mil veintidós**;el plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 178 de la Ley de la materia el cual otorga al **RECURRENTE** para presentar el Recurso de Revisión, transcurrió del **veintiuno de diciembre de dos mil veintidós al veintiséis de enero de dos mil veintitrés,** sin contemplar en el cómputo los días sábados y domingos, considerados como días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; así mismo, los considerados como días inhábiles por periodo vacacional en términos del Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de labores del Instituto para el año dos mil veintitrés y enero dos mil veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

En ese tenor, si el Recurso de Revisión que nos ocupa, se tuvo por interpuesto el **nueve de enero de dos mil veintitrés**, éste se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el precepto legal citado en el párrafo anterior y, por tanto, su interposición se realizó dentro de los términos legales ya referidos.

**CUARTO. Procedibilidad.**

Del análisis efectuado, se advierte la procedibilidad de los presentes Recursos de Revisión, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en **EL SAIMEX**, y cumplimiento a la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios mismos que a la letra señalan lo siguiente:

*“****Artículo 180****. El Recurso de Revisión contendrá:*

***I****. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;*

***II****. El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir notificaciones;*

***III****. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso;*

***IV****. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;*

***V****. El acto que se recurre;*

***VI****. Las razones o motivos de inconformidad;*

***VII****. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, en el caso de respuesta de la solicitud; y*

***VIII****. Firma del recurrente, en su caso, cuando se presente por escrito, requisito sin el cual se dará trámite al recurso.*

*Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.*

*En ningún caso será necesario que la particular ratifique el Recurso de Revisión interpuesto.*

*En caso de que el recurso se interponga de manera electrónica no será indispensable que contengan los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, VII y VIII.”*

**QUINTO. Estudio y Resolución del Recurso.**

Con la finalidad de estar en posibilidad de dictar el fallo correspondiente conforme a derecho, el presente estudio se basará en el contenido íntegro de las actuaciones que del expediente electrónico que obra en EL SAIMEX, tomando en consideración los elementos aportados por las partes y respetando en todo momento al principio de máxima publicidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás leyes aplicables en la materia; así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

Primero, es importante señalar que **EL SUJETO OBLIGADO** es competente para generar, recopilar, administrar, manejar, procesar, archivar, corregir o poseer la información solicitada, derivado de que éste ha asumido la misma, ya que en respuesta se pronunció respecto a la información peticionada por el particular.

Por lo que, el hecho de que **EL SUJETO OBLIGADO** haya asumido contar con la información pública solicitada, aceptó que es información que genera, recopila, administra, maneja, procesa, archiva o corrige, en el ejercicio de sus funciones de derecho público, motivo por el cual se actualiza el supuesto jurídico, previsto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra señala:

*“****Artículo 12.*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

En atención a lo anterior, el estudio de la naturaleza jurídica de la información pública solicitada, tiene por objeto determinar si **EL SUJETO OBLIGADO** la genera, recopila, administra, maneja, procesa, archiva o corrige; sin embargo, en aquellos casos en que éste la asume, a nada práctico nos conduciría su estudio, ya que como se observa de la respuesta vertida por **EL SUJETO OBLIGADO**, dicha información, fue admitida por el mismo; actualizándose el supuesto artículo 12 de la Ley de la materia, anteriormente referido.

Una vez precisado lo anterior, se procede a realizar el análisis de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** a fin de determinar si cumple con los requisitos del derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que en primer término debemos recordar que **EL RECURRENTE** en el ejercicio de su derecho de Acceso a la Información realizó un requerimiento de acceso a la información formulado por un total de doce puntos petitorios.

Al respecto, **EL SUJETO OBLIGADO** mediante respuesta remitió las manifestaciones de sus servidores públicos habilitados, adjuntando para tal efecto un total de seis archivos, mismos que contienen las respuestas que fueron desagregadas en antecedentes.

Sin embargo, es importante enfatizar que ante tal respuesta proporcionado por **EL SUJETO OBLIGADO**, el particular interpuso el Recurso de Revisión materia del presente asunto, adoleciéndose de la falta de entrega de información respecto a los siguientes puntos:

1. *FALTA DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL REQUERIMIENTO NÚMERO 4. "Documento donde conste los motivos de la destitución, despido o cualquier otro motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral."*
2. *CLASIFICACIÓN INCOMPLETA DEL PUNTO NÙMERO 5. "Curriculum Vitae."*
3. *CLASIFICACIÓN EXCESIVA Y POCO CLARA DEL PUNTO 12. "Se informe si la ciudadana tiene procedimientos internos vigentes y concluidos, si es el caso, se informe los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas."”*

Asimismo, es importante señalar que **EL RECURRENTE** no realizó manifestaciones, alegatos o pruebas y por su parte **EL SUJETO OBLIGADO** omitió rendir su Informe Justificado, en el término establecido en el numeral 185, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que **EL RECURRENTE** únicamente se agravió por la falta de pronunciamiento en el requerimiento identificado con el numeral 4; por la clasificación incompleta del punto número 5 y una clasificación excesiva y poco clara del punto 12;por tal circunstancia, no se hará pronunciamiento sobre la información entregada por el Sujeto Obligado para atender los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del requerimiento de acceso a la información formulado por el particular, lo anterior de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación con el diverso 195, fracción IV, de Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece que será improcedente el recurso contra **los actos que se hayan consentido tácitamente,** entendiéndose por estos cuando el agravio no se haya promovido en el plazo señalado para el efecto.

De la misma manera resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación de rubro **ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE**, Tesis VI.2o. J/21, emitida en la novena época, por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en agosto de 1995, página 291, número de registro 204707, del que se desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos establecidos en la Ley, se presume que el Particular está conforme con los mismos.

Conforme a lo previo, en el caso de que el Solicitante no haya manifestado su inconformidad en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por consentido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravio en su contra, por lo que, en la especie, se válida la respuesta respecto de los puntos no controvertidos y se arriba a la conclusión de que estos quedaron firmes. Situación, que se robustece con el Criterio 01/20, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Conforme al Criterio establecido, es improcedente entrar al análisis de las partes de la respuesta del Sujeto Obligado que no fueron impugnadas por **EL RECURRENTE**; por lo que, en el presente caso, se tiene por consentidos los pronunciamientos realizados por **EL SUJETO OBLIGADO**, a los numerales 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Asimismo, no se omite comentar que respecto al pronunciamiento por parte del **SUJETO OBLIGADO**, a fin de dar respuesta a la solicitud planteada, este Instituto no está facultado para manifestarse sobre la veracidad de la información proporcionada.

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio 31/10 emitido por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual refiere:

***“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos proporcionados por los sujetos obligados****. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos conocer, vía recurso revisión, al respecto.*

En ese contexto, esta Ponencia considera conveniente entrar al estudio de los rubros que fueron impugnados por el hoy **RECURRENTE**, a fin de verificar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** cumplió con el derecho de acceso a la información pública del particular.

Es así que, respecto al requerimiento realizado por el particular identificado con el numeral 4, relacionado con **el documento donde consten los motivos de destitución, despido o cualquier otro motivo por el que se dio por terminada la relación laboral, se estudia a continuación:**

Primero, se considera conveniente traer a contexto la parte que nos interesa de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la cual establece lo siguiente:

***“ARTÍCULO 89.*** *Son* ***causas de terminación de la relación laboral*** *sin responsabilidad para las instituciones públicas:*

***I.*** *La renuncia del servidor público;*

***II.*** *El mutuo consentimiento de las partes;*

***III.*** *El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación;*

***IV.*** *El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el servidor público a que se refiere el artículo 8 de ésta Ley;*

***V.*** *La muerte del servidor público; y*

***VI.*** *La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus labores.*

***ARTÍCULO 92.******El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral.***

***ARTÍCULO 94.*** *La* ***institución pública deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.***

*En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal o de la Sala, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público.*

*La falta de aviso al servidor público, al Tribunal o a la Sala por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.*

***ARTÍCULO 95.*** *Son* ***causas de rescisión de la relación laboral****, sin responsabilidad para el servidor público:*

***…***

*En estos casos,* ***el servidor público podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo base, veinte días por cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el Servidor Público se haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de doce meses o hasta que el servidor público se incorpore*** *a laborar en un municipio o institución pública de los poderes del Estado o cualquier organismo estatal, siempre y cuando esto último ocurra en un plazo no mayor a los doce meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure el proceso.*

*Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 95, 96 y 97 no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a razón del nueve por ciento anual capitalizable al momento del pago.*

***ARTÍCULO 96.-*** *El servidor público podrá solicitar ante el Tribunal o la Sala correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice.* ***Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el Tribunal o en la Sala que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que , dure el proceso.***

*No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 de esta ley.*

*Cuando el servidor público ejercite la acción de reinstalación en el trabajo que desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus prestaciones a que tenga derecho con los incrementos que sufra su salario en el periodo que dure el proceso, con excepción de los salarios vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en el máximo de doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.*

***En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en parte lo reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda nacional o en cheque certificado a nombre de éste****, previa cuantificación que haga el Tribunal o la Sala de que las cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se encuentren ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto se dará por terminado el juicio liberando a la institución pública de la acción principal y sus accesorias.*

*El Tribunal o la Sala aprobará la consignación de pago y pondrá a disposición del actor la cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que para el supuesto de no aceptar la cantidad base de su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr, caso contrario se ordenará el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido.*

*Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte demandada sea menor a la que le corresponda al actor, el Tribunal o la Sala le requerirá, para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos de notificación el acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.*

*Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por indemnizaciones y sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, continuándose con el procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.*

*En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto.*

***ARTÍCULO 97.-*** *Las* ***instituciones públicas*** *o dependencias no estarán* ***obligadas*** *a reinstalar al servidor público, pero sí* ***a cubrirle la indemnización de tres meses de salario base, veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 95 párrafo segundo de esta ley y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses,*** *independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque certificado al momento de la negativa de reinstalar al actor.****”***

*(Énfasis añadido)*

De lo anterior, podemos advertir la existencia de dos supuestos, la terminación de la relación laboral y la rescisión laboral, ello sin dejar de lado la figura enmarcada en el artículo 94 tratándose del despido, o aquéllas derivadas de una sanción administrativa.

Es así que, derivado que los **sujetos obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones**, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generan, de conformidad con los artículos 18, 24 XXII y 160 de la Ley de la Materia, que a la letra señalan lo siguiente:

***“Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.***

***…***

***Artículo 24****. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:*

*[…]*

***XXII. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y abstenerse de destruirlos u ocultarlos, dentro de los que destacan los procesos deliberativos y de decisión definitiva;***

***…***

***Artículo 160.*** *Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.”*

En consecuencia, este Órgano Garante determina ordenar al **SUJETO OBLIGADO** haga entrega de ser procedente en **versión pública** el o los documentos donde conste el motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral entre **EL SUJETO OBLIGADO** y la persona referida en la solicitud.

Ahora bien, en continuación con el presente asunto, como segundo punto en discusión, ternemos el número 5, **el cual se encuentra relacionado con el currículum vitae de la persona referida en la solicitud**.

Por lo que se advierte que en respuesta **EL SUJETO OBLIGADO** remitió un archivo electrónico denominado: ***“Resp. Sol. 441 RH.pdf”,*** del que se desprende un oficio con número PMA/JRH/901/2022, firmado por la Jefa de Recursos Humanos, por medio del cual refirió entre otras cosas la remisión del currículum vitae, tal como se advierte a continuación:



Así, de una revisión en el archivo electrónico en mención, se advierte en la página 9, información relacionada con la servidora pública referida en la solicitud de mérito, tal como lo es su Currículum Vitae, sin embargo dicho documento fue proporcionado de manera íntegra, pues se dejaron a la vista datos sensibles tales como la calificación obtenida por la ciudadana en mención en sus diversos grados académicos, por lo tanto, respecto a las **calificaciones o promedios finales** asentadas en constancias o certificados de estudios, son consideradas como datos personales sensibles, conforme al artículo 4, fracción XII de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, ello por corresponder a la esfera de su titular cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o le conlleve un riesgo grave, puesto que se traducen en el número que distingue el desempeño escolar o la evaluación de los conocimientos demostrados en la vida escolar.

En efecto, debe tomarse en cuenta que las **calificaciones asentadas**  en un **certificado de estudios** derivan de una **acción y efecto de calificar**, un verbo que significa apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo, expresar dicho juicio o juzgar el grado de suficiencia de los conocimientos demostrados por un alumno mediante un examen o ejercicio determinado, en este caso de cada materia.

El concepto de calificación está vinculado al de evaluación, que se refiere a la acción de señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo. Así, una evaluación es el tipo de examen que permite **calificar las aptitudes y el rendimiento, en este caso de los alumnos**.

La calificación, por lo tanto, es el **resultado de la evaluación**; se conoce con el mismo nombre a la puntuación obtenida en el examen o cualquier otro tipo de prueba o bien de una materia.

Por su parte el concepto de **evaluación** se refiere también **a la acción y efecto de evaluar**, un verbo cuya etimología se remonta al francés *évaluer* y que permite **señalar, estimar, apreciar o calcular el valor de algo.**

**Es así que** una evaluación también es un **examen escolar** que permite calificar los **conocimientos**, las **aptitudes** y el **rendimiento** de los alumnos., es también -se dice- un proceso a través del cual se analiza el grado de desarrollo del alumno.

Por lo tanto, el certificado de estudios que proporciona un servidor público para acreditar su grado profesional, es información pública a fin de acreditar su perfil o idoneidad en el puesto o cargo, no así las calificaciones o evaluaciones expresadas en ellas, ya que conocer tal calificación no cumple con ningún de los objetivos de la Ley de la materia.

Ahora bien, derivado de que la información ya obra en poder del **RECURRENTE,** se precisa que es información que ya fue entregada, por lo tanto, ordenar la entrega de la misma en una **correcta versión pública**, causaría retraso en virtud de que la información ya es conocida por el particular.

Expuesto lo anterior, del análisis previo se le da la razón al particular pues señaló en sus Razones o Motivos de Inconformidad la: ***"CLASIFICACIÓN INCOMPLETA DEL PUNTO NÙMERO 5. "Curriculum Vitae.",*** motivo por el cual, derivado que **EL SUJETO OBLIGADO** dejó visible información sensible, susceptible de ser clasificada como confidencial, tal es el caso de las calificaciones, atento a ello, se deberá hacer del conocimiento al Titular de la Dirección General de Protección de Datos Personales en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios., a fin de que determinen lo conducente.

Asimismo, no debe perderse de vista que **la exposición de los ya referidos datos personales, traen como consecuencia al RECURRENTE una serie de responsabilidades y obligaciones para salvaguardar la información personal que, por mera negligencia, le fuera entregada**.

Al respecto, el artículo 63 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, considera como infracciones a la misma, las siguientes actividades:

*“****Artículo 63.-*** *Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable:*

***I.*** *No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley;*

***II.*** *Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;*

***III.*** *Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las bases de datos del responsable;*

***IV.*** *Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley;*

***V.*** *Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;*

***VI.*** *Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares;*

***VII.*** *No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64;*

***VIII. Incumplir el deber de confidencialidad*** *establecido en el artículo 21 de esta Ley;*

***IX.*** *Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto por el artículo 12;*

***X.******Transferir datos a terceros*** *sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación de los mismos;*

***XI.*** *Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable;*

***XII.******Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales****, fuera de los casos en que esté permitida por la Ley;*

***XIII.*** *Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste sea exigible;*

***XIV.*** *Obstruir los actos de verificación de la autoridad;*

***XV.*** *Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta;*

***XVI.*** *Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el Instituto o los titulares;*

***XVII.*** *Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;*

***XVIII.*** *Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y*

***XIX.*** *Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente Ley.”*

***(Énfasis añadido)***

Por lo anterior, este Órgano Garante exhorta al **RECURRENTE** a conducir el uso de los datos personales que ahora están en su posesión, con sumo respeto y secrecía, siguiendo los principios de licitud, lealtad y responsabilidad, previstos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Por ello, es conveniente señalar las fracciones XIV, XXII, XXIII y XXV, del artículo 82, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, que establece:

***Atribuciones del Instituto***

***Artículo 82.*** *El Instituto, además de las atribuciones encomendadas por la Ley de Transparencia y normatividad aplicable, tendrá las atribuciones siguientes:*

*(…)*

***XIV.******Formular observaciones y recomendaciones*** *a los sujetos obligados que incumplan esta Ley.*

*(…)*

***XXII.******Verificar el cumplimiento*** *de las disposiciones previstas en esta Ley a través de los procedimientos de revisión que resulten compatibles con las disposiciones de esta Ley.*

***XXIII.******Implementar*** *los* ***procedimientos*** *que resulten necesarios* ***para el cumplimiento*** *de las disposiciones de esta Ley y para asegurar la protección de datos personales de los titulares. (…)*

***XXV.******Investigar*** *las* ***posibles violaciones*** *a la seguridad de los datos personales a fin de determinar la práctica de verificaciones.*

*(…)”*

(Énfasis añadido)

Por lo tanto, se concluye que respecto al Currículum Vitae, se tiene por atendido el punto en controversia, solicitado por el particular.

Finalmente, respecto al tercer punto en Litis, recordemos que fue señalado por el particular, la inconformidad sobre la falta de entrega de información para atender el punto 12, pues señaló en sus Razones o Motivos de Inconformidad lo siguiente:

*“CLASIFICACIÓN EXCESIVA Y POCO CLARA DEL PUNTO 12. "Se informe si la ciudadana tiene procedimientos internos vigentes y concluidos, si es el caso, se informe los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas."*

Por lo que, adentrándonos a este punto en específico, es importante referir que en respuesta fue remitido un oficio con número CIM/AI/OF.189/2022, firmado por la Autoridad Investigadora Adscrita a la Contraloría Interna Municipal de Atenco, Estado de México, por medio del cual, hizo del conocimiento que a la fecha de la respuesta (16/12/2022), de hacerse pública la información podría ocasionar un perjuicio real y directo a la conducción de los expedientes o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de procedimientos, en tanto no hayan quedado firmes, además de poner en riesgo la etapa de investigación por lo que refirió que se debía restringir el acceso a la información cuando sea clasificada como reservada, para lo cual presentaba la prueba de daño, por lo que el suscrito requirió fuera tomado a consideración del Comité de Transparencia la clasificación de la información referida en el numeral 12 como **reservada.**

Sin embargo, para este punto en análisis, es importante delimitar que el particular pretendía conocer sí la servidora pública referida en la solicitud de mérito, tenía o no procedimientos administrativos vigentes y concluidos, de ser el caso que **EL SUJETO OBLIGADO** señalara en sentido afirmativo, debía informar los motivos, números de expedientes y las resoluciones emitidas.

Por tanto, este Órgano Garante señala que de manera equivocada, **EL SUJETO OBLIGADO** reservó **“los expedientes administrativos”** porque se encontraban en trámite, por lo que dicha decisión, en automático hizo del conocimiento al particular, la primer duda planteada, siendo de esta manera el informe requerido por el particular para conocer sí la servidora pública señalada en la solicitud contaba con procedimientos internos vigentes y concluidos.

Lo antes expuesto, deja en evidencia que es obvio que a la fecha de la respuesta del **SUJETO OBLIGADO (20 de diciembre de 2022)** se encontraba en trámite algún procedimiento en contra de la servidora pública referida en la solicitud de mérito.

Por lo tanto, **el precisar si existe o no un juicio en donde la persona señalada en la solicitud de información es parte,** va en contra del derecho a la vida privada, pues se dio a conocer que a dicha persona se le inicio un juicio administrativo, lo cual ocasiona una percepción negativa de esta y daría a conocer la decisión personal de defenderse en dicho procedimiento administrativo.

En ese contexto, se trae a colación la tesis aislada número 2a. LXIII/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de mayo de 2008, página 229, de la Novena Época, materia constitucional, misma que a la letra señala:

***“DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.*** *Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida.”*

Conforme a dicha tesis aislada, la garantía de seguridad jurídica de los individuos a no ser molestados en su persona, familia, papeles o posesiones, salvo cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, y cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es así, que derivado que **EL SUJETO OBLIGADO** debió clasificar el pronunciamiento respecto si la servidora pública precisada en la solicitud contaba o no con procedimientos, pues la hace identificable; este Órgano Garante determina hacer del conocimiento al al Titular de la Dirección de Protección de Datos Personales en atención al artículo 82, fracción XXVII de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios., a fin de que determinen lo conducente.

Entrados en materia, y una vez que ha sido delimitado el primer punto de análisis del requerimiento marcado con el numeral 12, es preciso señalar que **EL RECURRENTE** también solicitó que en caso de que la ciudadana referida en la solicitud de mérito se encontrase en algún procedimiento administrativo, le fuera proporcionado **un informe que contenga los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas a dicha servidora pública**; sin embargo, lo antes expuesto guarda relación, toda vez que debido a que ya conocemos que existe procedimientos en trámite, pues lo conducente es **ORDENARLE** al **SUJETO OBLIGADO** que a través del Comité de Transparencia sea aprobada la Confidencialidad del Pronunciamiento requerido como “informe” sobre los motivos, los números de expediente, esto por el simple hecho de que al encontrarse en trámite, debe de guardarse sigilo y principalmente en aras de un procedimiento administrativo justo no debe de existir pronunciamiento alguno posterior al ya realizado por parte del ente recurrido. Asimismo, es necesario precisar que derivado que no es procedente ordenar las resoluciones, dado que **EL SUJETO OBLIGADO** precisó en respuesta que se encontraban los expedientes en trámite.

Como sustento a lo antes expuesto, dar a conocer mayores elementos como los que solicita el particular, constituye información confidencial que afecta la esfera privada de la ciudadana referida en la solicitud de mérito, dado que vulneraría la protección de su intimidad, al tratarse de información que da cuenta de situaciones concretas en ejercicio de sus derechos que hacen evidente la posición jurídica y aún más, que derivado a que se encuentra en trámite, no podemos deducir si es responsable o no de lo que se le señale.

Razón por la cual, se considera que **EL SUJETO OBLIGADO** debe de clasificar el pronunciamiento, sobre la información requerida, en términos de lo previsto en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Para lo cual debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que precisa que en caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información requerida deban ser clasificados, el área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive dicha situación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:

1. Confirmar la clasificación;
2. Modificar la clasificación y, otorgar total o parcialmente el acceso a la información, o
3. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, lo que en el presente caso sucedió.

Por último, no pasa desapercibido mencionar que, si bien, en el presente caso, la parte solicitante requirió **resoluciones**, información que de conformidad con el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio, corresponde a obligaciones de transparencia específicas, como se puede observar:

***Artículo 96.*** *Además de las obligaciones de transparencia común a que se refiere el Capítulo II de este Título, el Poder Judicial Local y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:*

*I. Las tesis y ejecutorias publicadas en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en la Gaceta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas;*

***II. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;***

*III. Las versiones estenográficas, taquigráficas, magnetofónicas, video gráficas, electrónicas o de cualquier otra naturaleza, de las sesiones públicas de cualquiera de sus órganos;*

*IV. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados los jueces y magistrados, según corresponda;*

*V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen;*

*VI. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados finales de los mismos, así como los procesos de ratificación de los funcionarios judiciales; y*

*VII. Los perfiles y formas de evaluación del personal judicial y administrativo.*

También lo es que, ese precepto normativo, sólo opera cuando no se han hecho identificables a las partes, siendo que en el presente caso, debido a que, la parte Recurrente requiere información de una persona en específico, la entrega de información aun siendo en versión pública, vulneraría su privacidad.

Dicho lo anterior, se considera que, para atender el requerimiento de información, **EL SUJETO OBLIGADO** deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y, proporcionar el **Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación del pronunciamiento sobre los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas respecto de la ciudadana mencionada en la solicitud de mérito.**

Ahora, derivado a ello este Órgano Garante advierte que cuando se trata de actos de corrupción no podrá invocarse la reserva del expediente de responsabilidad administrativa, entonces acorde a los preceptos mencionados se advierte que no hubo pronunciamiento del **SUJETO OBLIGADO** sobre este punto, previsto en el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que dice:

*“Artículo 142. Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando:*

*…*

***IV. Se trate de información relacionada con*** ***actos de corrupción de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.****”*

*(Énfasis añadido)*

Sirve de analogía el criterio jurisprudencial, emitido por Suprema Corte de Justicia de la Nación, con encontrado en el libro 74, enero de 2020, Tomo I, página 562, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, cuyo tenor literal es el siguiente:

*“****DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO PUEDE ALEGARSE EL CARÁCTER DE "RESERVADO" DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS CUANDO LA INVESTIGACIÓN VERSE SOBRE VIOLACIONES GRAVES DE DERECHOS FUNDAMENTALES O DELITOS DE LESA HUMANIDAD****. El artículo 14 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece los supuestos en los cuales la información se considera reservada, entre ellos, las averiguaciones previas. Sin embargo, el último párrafo de dicho precepto señala que no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Sobre esta excepción, es importante precisar que su justificación reside en la vertiente social del derecho a la información y en su carácter instrumental frente al goce de otros derechos humanos, en tanto que esta dimensión colectiva del derecho impacta directamente en el ejercicio y control democrático del poder, teniendo como su eje fundamental precisamente el interés general que reviste el conocimiento sobre determinada información. Desde esta perspectiva, tratándose de investigaciones sobre violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, el derecho de acceso a la información debe prevalecer sobre la tutela que conlleva la reserva de las averiguaciones previas pues, por un lado, se afectan bienes de tal relevancia y con tal intensidad que el perjuicio trasciende de la esfera individual de la persona directamente afectada para constituirse como una afectación a la sociedad como un todo y, además, porque su conocimiento permite el ejercicio de un control y escrutinio por parte de la sociedad respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado ante este tipo de violaciones y delitos, estableciéndose así una relación instrumental frente a otros derechos humanos, al instituirse el derecho de acceso a la información como una garantía para su protección.”*

Por lo tanto, **EL SUJETO OBLIGADO** deberá hacer entrega de la información que en su caso se haya generado al 11 de diciembre de 2022 (fecha en que fue ingresada la solicitud de mérito), lo anterior **únicamente para el caso de que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios**, que a la letra establecen:

***Artículo 142.*** *Bajo ninguna circunstancia podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I.* ***Se trate de violaciones graves de derechos humanos****, calificada así por autoridad competente;*

*II.* ***Se trate de la investigación de posibles violaciones graves de derechos humanos aun cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente,*** *cuando se determine, a partir de criterios cuantitativos y cualitativos la trascendencia social de las violaciones;*

*III.* ***Se trate de delitos de lesa humanidad*** *conforme a los tratados ratificados por el Senado de la República, las resoluciones emitidas por organismos internacionales cuya competencia sea reconocida por el Estado Mexicano, así como en las disposiciones jurídicas aplicables; y*

*IV.* ***Se trate de información relacionada con actos de corrupción*** *de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.*

De no actualizarse este supuesto bastará con que así se lo haga del conocimiento del particular.

Es así, que del análisis realizado a las documentales que integran el expediente electrónico, este Órgano Garante determina que no se tiene por colmado el derecho de acceso a la información ejercido por el particular, ello en razón de que la información entregada en respuesta carece de certeza jurídica, la cual es un principio rector de este Instituto según lo dispuesto por el artículo 9, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que a la letra dice:

*“****Artículo 9.*** *El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:*

***I. Certeza:*** *Principio que* ***otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares****, en virtud de que permite conocer si las acciones del Instituto son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;”*

*(Énfasis añadido)*

Con lo señalado en el párrafo que antecede y a fin de robustecer la determinación que se asentará en la presente resolución, conviene citar el criterio orientador 002/2017 del INAI, y la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es el siguiente:

*“****Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7;* ***todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad.*** *Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

*(Énfasis añadido)*

Del criterio citado se desprende que las respuestas de los sujetos obligados deberán contar con dos elementos; **la congruencia y la exhaustividad**. Entendiendo el primero como una relación entre el requerimiento formulado y la respuesta propiciada; mientras el segundo como atender de manera puntual a cada uno de los pronunciamientos en la solicitud. Es así que se entiende que, no es suficiente con que exista una respuesta por parte del **SUJETO OBLIGADO** para dar por colmado el derecho de acceso a la información, sino que esta debe atender a lo solicitado por **EL RECURRENTE** de forma clara y específica.

Por lo que, al no ser congruente la respuesta, este Órgano Garante determina que se tiene por colmado de manera parcial el derecho de acceso a la información accionado por el particular, pues proporcionó de manera incorrecta e integra el Currículum de la servidora pública que fue solicitada, sin embargo, respecto a la falta de pronunciamiento del numeral 4. "documento donde conste los motivos de la destitución, despido o cualquier otro motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral” y respecto a la clasificación excesiva y poco clara del punto 12. "se informe si la ciudadana tiene procedimientos internos vigentes y concluidos, si es el caso, se informe los motivos, los números de expediente y las resoluciones emitidas.", al no ser claro el ente recurrido y no proporcionar las documentales correctas generaron incertidumbre jurídica, y la inconformidad vertida por el particular en el presente asunto.

Por lo anterior, no se omite comentar que para el caso de que el o los documentos de los cuales se ordena su entrega, contengan datos personales susceptibles de ser testados, deberán ser entregados en **versión pública**; pues, el derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que abonen a la rendición de cuentas y a la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas. De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

A este respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI y XLV; 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios establecen:

***“Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

***IX.******Datos personales:*** *La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX.******Información clasificada:*** *Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI.******Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 51.*** *Los sujetos obligados designaran a un responsable para atender la Unidad de Transparencia, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información* ***y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada.*** *Dicha Unidad contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de información en los términos de la Ley General y la presente Ley.*

***Artículo 52.*** *Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su caso, la información entregada, así como las resoluciones a los recursos que en su caso se promuevan serán públicas, y de ser el caso que contenga datos personales que deban ser protegidos se podrá dar su acceso en su versión pública, siempre y cuando la resolución de referencia se someta a un proceso de disociación, es decir, no haga identificable al titular de tales datos personales.”*

(Énfasis añadido)

Así, los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados deben estar protegidos, adoptando las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, considerando además, que conforme al principio de finalidad, todo tratamiento de datos personales que efectúen, deberá estar justificado en la Ley, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo primero con relación con el 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, los cuales se transcriben para mayor referencia:

***“Artículo 22.*** *Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.*

***Artículo 38.*** *Con independencia del tipo de sistema y base de datos en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable adoptará, establecerá, mantendrá y documentará las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, a través de controles y acciones que eviten su daño, alteración, pérdida, destrucción, o el uso, transferencia, acceso o cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos que al efecto se expidan.****”***

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la Ley de la materia permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares toda vez que ésta tiene por objeto proteger datos personales, entendiéndose por tales, aquéllos que hacen identificable a una persona.

Lo anterior es así, en virtud de que toda la información relativa a una persona física o jurídico colectiva que le pueda hacer identificada o identificable constituye un dato personal en términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; por consiguiente, se trata de información confidencial que debe ser protegida por **EL SUJETO OBLIGADO,** por lo que, todo dato personal susceptible de clasificación debe ser protegido.

La finalidad de la versión pública de la información, es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, patrimonio y privacidad de las personas; de tal manera que todo aquello que no tenga por objeto proteger lo anterior, es susceptible de ser entregado; en otras palabras, la protección de datos personales, entre ellos el del patrimonio y su confidencialidad, es una derivación del derecho a la intimidad.

Asimismo, es importante señalar que dicha clasificación se tiene que efectuar mediante la forma y formalidades que la ley de la materia impone; es decir, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, de su Comité de Transparencia, en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los numerales Segundo, fracción XVIII, y del Cuarto al Décimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, que literalmente expresan:

***Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios***

***“Artículo 49.*** *Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII.*** *Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información;*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

*III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.****”***

***“Segundo.-*** *Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:*

***XVIII.******Versión pública:*** *El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.*

***Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información***

***Cuarto.*** *Para clasificar la información como reservada o confidencial, de manera total o parcial, el titular del área del sujeto obligado deberá atender lo dispuesto por el Título Sexto de la Ley General, en relación con las disposiciones contenidas en los presentes lineamientos, así como en aquellas disposiciones legales aplicables a la materia en el ámbito de sus respectivas competencias, en tanto estas últimas no contravengan lo dispuesto en la Ley General.*

*Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera estricta, las excepciones al derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia.*

***Quinto.*** *La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de clasificación previstos en la Ley General, la Ley Federal y leyes estatales, corresponderá a los sujetos obligados, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación de la información ante una solicitud de acceso o al momento en que generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando lo dispuesto en la Ley General y las demás disposiciones aplicables en la materia.*

***Sexto.*** *Se deroga.*

***Séptimo.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I.*** *Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución del Comité de Transparencia, el órgano garante competente, o en cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas.*

*Los titulares de las áreas deberán revisar la información requerida al momento de la recepción de una solicitud de acceso, para verificar, conforme a su naturaleza, si encuadra en una causal de reserva o de confidencialidad.*

***Octavo.*** *Para fundar la clasificación de la información se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.*

*Para motivar la clasificación se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación deberá comprender el análisis de la prueba del daño a que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, en relación con el artículo trigésimo tercero de los presentes lineamientos, así como las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

***Noveno.*** *En los casos en que se solicite un documento o expediente que contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán elaborar una versión pública fundando y motivando la clasificación de las partes o secciones que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo IX de los presentes lineamientos.*

***Décimo.*** *Los titulares de las áreas, deberán tener conocimiento y llevar un registro del personal que, por la naturaleza de sus atribuciones, tenga acceso a los documentos clasificados. Asimismo, deberán asegurarse de que dicho personal cuente con los conocimientos técnicos y legales que le permitan manejar adecuadamente la información clasificada, en los términos de la Ley General de Archivo, Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos y demás normatividad aplicable.*

*En ausencia de los titulares de las áreas, la información será clasificada o desclasificada por la persona que lo supla, en términos de la normativa que rija la actuación del sujeto obligado.*

***Décimo primero.*** *En el intercambio de información entre sujetos obligados para el ejercicio de sus atribuciones, los documentos que se encuentren clasificados deberán llevar la leyenda correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VIII de los presentes lineamientos.****”***

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de los particulares.

Consecuentemente, se destaca que la versión pública que elabore **EL SUJETO OBLIGADO** debe cumplir con las formalidades exigidas en la Ley, por lo que para tal efecto emitirá el **Acuerdo del Comité de Transparencia** en términos de los artículos 122 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con el cual sustentará la clasificación de datos y con ello la "versión pública" de los documentos materia de la solicitud, ya que no hacerlo implica que lo entregado no es legal ni formalmente una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; pues no señalar las razones por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva, es decir, si no se exponen de manera puntual las razones de ello se estaría violentando desde un inicio el derecho de acceso a la información del solicitante.

En razón de lo anteriormente expuesto, este Instituto estima que las razones o motivos de inconformidad hechos valer por **EL RECURRENTE** devienen **fundadas** y suficientes para **MODIFICAR** la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** y ordenarle haga entrega de la información descrita en el presente Considerando.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5, párrafo trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y los artículos 2, fracción II, 9, 29, 36, fracciones I y II, 176, 178, 179, 181, 185, fracción I, 186 y 188, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO**. Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad planteadas por **EL RECURRENTE**, en términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO**. Se **MODIFICA** la respuesta proporcionada por **EL SUJETO OBLIGADO,** que generó el Recurso de Revisión **00117/INFOEM/IP/RR/2023,** en términos del considerando **QUINTO** de la presente resolución, se **ORDENA** al **SUJETO OBLIGADO** entregar al **RECURRENTE,** a través del **SAIMEX** de ser procedente en **versión pública,** de lo siguiente:

*a) El documento donde conste el motivo por el cual se dio por terminada la relación laboral entre* ***EL SUJETO OBLIGADO*** *y la persona referida en la solicitud.*

*Debiendo notificar al* ***RECURRENTE*** *el Acuerdo de Clasificación de la información que emita el Comité de Transparencia con motivo de la versión pública de ser procedente.*

*b) Acuerdo emitido por el Comité de Transparencia, en donde de manera fundada y motivada, confirme la clasificación del pronunciamiento sobre los motivos y los números de expediente de la que la persona referida en la solicitud, de conformidad con los artículos 49, fracción II, 132, fracción II, 143, fracción I, y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

*En el supuesto de que, la persona referida en la solicitud de información, sea parte de un procedimiento que encuadre en los supuestos establecidos relacionados con actos de corrupción o violaciones graves a derechos humanos, en términos del artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,* ***EL SUJETO OBLIGADO*** *deberá hacer entrega de la información solicitada, que en su caso se haya generado al 11 de diciembre de 2022. En caso de no actualizarse este supuesto bastará con que así se lo haga del conocimiento del particular.*

**TERCERO. Notifíquese** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** **Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución vía **SAIMEX**.

**QUINTO.** **Hágase** **del conocimiento** del **RECURRENTE**, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y con lo establecido en los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá impugnarla vía recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, o bien, vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

**SEXTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**SÉPTIMO.** Gírese oficio a la Dirección de Protección de Datos Personales de este Instituto para hacer de su conocimiento la presente resolución, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, fracciones XIV, XXII, XXIII y XXV, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, determine lo conducente, en términos del Considerando **QUINTO.**

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

SCMM/AGZ/DEMF/CCA

1. *Si bien, se registró el once del mismo mes y año, a través de dicho portal, también lo es, que fue inhábil, de conformidad con el artículo 3°, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de labores del Instituto, por lo que, se tuvieron por recibidos, el día hábil subsecuente.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Si bien, se registró el seis del mismo mes y año, a través de dicho portal, también lo es, que fue inhábil, de conformidad con el artículo 3°, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Calendario Oficial en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como de labores del Instituto, por lo que, se tuvieron por recibidos, el día hábil subsecuente.* [↑](#footnote-ref-2)